



Asamblea General

Distr. general
31 de enero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

Opinión núm. 66/2019 relativa a los Sres. Saidumar Husaini, Muhammadali Faiz-Muhammad, Rahmatulloi Rajab, Zubaidulloi Roziq, Vohidkhon Kosidinov, Kiyomiddin Avazov, Abduqahar Davlatov, Hikmatulloh Sayfulloza, Sadidin Rustamov, Sharif Nabiev y Abdusamat Ghayratov (Tayikistán)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2 De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el 19 de julio de 2019 el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de Tayikistán una comunicación relativa a los Sres. Saidumar Husaini, Muhammadali Faiz-Muhammad, Rahmatulloi Rajab, Zubaidulloi Roziq, Vohidkhon Kosidinov, Kiyomiddin Avazov, Abduqahar Davlatov, Hikmatulloh Sayfulloza, Sadidin Rustamov, Sharif Nabiev y Abdusamat Ghayratov. El Gobierno respondió, con retraso, el 2 de octubre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. La fuente alega la detención y condena arbitrarias de 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán. El 16 de septiembre de 2015, funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional detuvieron a esas 11 personas, además de otros 2 miembros del Partido, sin órdenes de detención. El 2 de junio de 2016, después de haber permanecido en prisión preventiva, el Juez Togado Militar los declaró culpables en un juicio colectivo y les impuso penas que iban desde 14 años de prisión hasta cadena perpetua. Los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico encarcelados son:

a) Saidumar Husaini, nacido en 1961, primer Vicepresidente del Partido y miembro de su Consejo Político Supremo. Fue miembro del Parlamento de Tayikistán de marzo de 2010 a marzo de 2015. El Sr. Husaini fue detenido en el aeropuerto de Dushanbé por oficiales uniformados del Comité Estatal de Seguridad Nacional. Su familia pasó los días siguientes intentando localizarlo, para lo que visitaron comisarías de policía y otras instalaciones, pero las autoridades se negaron a revelar información alguna sobre su paradero. Cuatro o cinco días después de su detención, el Gobierno informó a su familia de su paradero, pero no se les permitió verlo en ese momento. El Sr. Husaini fue condenado a cadena perpetua, pena que debía cumplir en un régimen de máxima seguridad;

b) Muhammadali Faiz-Muhammad, nacido en 1962, miembro del Consejo Político Supremo del Partido. Al parecer, fue detenido por oficiales del Comité Estatal de Seguridad Nacional mientras se dirigía a su casa. No se le informó sobre el fundamento jurídico de su detención ni sobre los cargos que se le imputaban. Su familia no supo dónde estaba o que había sido detenido hasta diez días después. Cuando se informó a los familiares de la detención, no se les permitió verlo. El Sr. Faiz-Muhammad fue presuntamente golpeado, interrogado y torturado. Fue condenado a 23 años de prisión;

c) Rahmatulloi Rajab, nacido en 1958, miembro del Consejo Político Supremo del Partido. Fue detenido en su casa por funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional que llevaban ropas civiles. Los funcionarios dijeron a su familia que necesitaban hablar con él y que volvería pronto, pero nunca lo hizo. Treinta minutos después de la detención, llegaron otros diez funcionarios que registraron su casa sin una orden de registro. Según la fuente, el Sr. Rajab recibió numerosas palizas y fue torturado durante tres días consecutivos después de la detención. Fue condenado a 28 años de prisión;

d) Zubaidulloi Roziq, nacido en 1946, miembro del Consejo Político Supremo del Partido. Fue detenido a la entrada de su casa por funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional vestidos con ropas civiles que le pidieron que los acompañara a dar un paseo y le dijeron que volverían en una o dos horas, pero nunca regresaron. El Sr. Roziq fue condenado a 25 años de prisión;

e) Vohidkhon Kosidinov, nacido en 1956, miembro del Consejo Político Supremo del Partido y jefe del departamento de elecciones. El Sr. Kosidinov fue detenido en el norte de Tayikistán y condenado a 16 años de prisión;

f) Kiyomiddin Avazov, nacido en 1973, político, Presidente de la sección del Partido de Dushanbé, antiguo empleado del aparato del Partido y especialista en lengua árabe. Era un miembro activo del Consejo Político Supremo del Partido. El Sr. Avazov fue

condenado a 28 años de prisión, pena que debía cumplir en un régimen de máxima seguridad;

g) Abduqahar Davlatov, nacido en 1975, miembro del Consejo Político Supremo del Partido y jefe del departamento de relaciones exteriores. Fue condenado a 28 años de prisión;

h) Hikmatulloh Sayfulloza, nacido en 1950, miembro del Consejo Político Supremo del Partido y redactor jefe del periódico *Najat*. Fue condenado a 16 años de prisión;

i) Sadidin Rustamov, nacido en 1956, miembro del Consejo Político Supremo del Partido. Fue condenado a 20 años de prisión;

j) Sharif Nabiev, nacido en 1962, miembro del Consejo Político Supremo del Partido y jefe de su sección de Kulab. Fue condenado a 14 años de prisión;

k) Abdusamat Ghayratov, nacido en 1967, miembro del Consejo Político Supremo del Partido. Fue condenado a 14 años de prisión.

5. La fuente afirma que los Sres. Avazov, Davlatov, Sayfulloza, Rustamov, Nabiev y Ghayratov fueron privados de libertad el 16 de septiembre de 2015, aunque no se dispone de detalles precisos sobre su detención.

6. Según se informa, las 11 personas fueron acusadas de los siguientes cargos contemplados en el Código Penal: organización para delinquir; fomento de la hostilidad nacional, racial, local o religiosa; extremismo; privación ilegal de libertad; tentativa de comisión de un delito; sabotaje; robo de armas; comercio de armas; asesinato; terrorismo; toma del poder por la fuerza; rebelión armada y poligamia. Su juicio comenzó el 9 de febrero de 2016.

a) Prisión preventiva

7. La fuente informa de que los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico permanecieron en prisión preventiva en el centro de reclusión (preventiva) SIZO desde el momento de su detención hasta su condena el 2 de junio de 2016. Se les negó la libertad bajo fianza, sufrieron abusos repetidamente, fueron torturados y se les privó de acceso a los medicamentos y a la atención médica esencial.

8. Según la fuente, los 11 detenidos fueron objeto de diversas formas de coacción para que confesaran. Cuando el Sr. Husaini rechazó el ofrecimiento de un puesto en el Gobierno a cambio de aparecer en la televisión declarando que la actividad del Partido era ilegal, funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon. Según se informa, los funcionarios siguieron golpeando al Sr. Husaini durante todo el tiempo que permaneció en prisión preventiva. Fue recluido en régimen de aislamiento en el centro de detención y no se permitió que su familia lo visitara.

9. La fuente informa de que el Sr. Faiz-Muhammad también fue golpeado y torturado durante su prisión preventiva cuando se negó a denunciar al Partido y a sus dirigentes. Fue sometido a descargas eléctricas y recibió un disparo de pistola. A sabiendas de que sufría de una enfermedad renal, parece que los funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional lo golpearon en la zona de los riñones.

10. El Sr. Rajab fue presuntamente golpeado durante los tres primeros días que permaneció en prisión preventiva para obtener una confesión. A su familia no se le permitió verlo o comunicarse con él durante los primeros cuatro meses de prisión preventiva. Las fuentes informan de que los otros ocho miembros del Partido detenidos también sufrieron abusos y torturas durante el tiempo que permanecieron en prisión preventiva.

b) Imposibilidad de acceder a un abogado

11. La fuente afirma que ninguno de los 11 hombres tuvo acceso a un abogado inmediatamente después de su detención. Se les negó esa asistencia hasta el 26 de septiembre de 2015. Incluso después de que se les permitiera reunirse con abogados, las

autoridades supuestamente hicieron todo lo posible por impedir que recibieran una asistencia jurídica eficaz.

12. Una violación notoria de su derecho a la asistencia letrada fue la detención de uno de sus abogados. Poco después de la detención de los miembros del Partido del Renacimiento Islámico, su abogado anunció públicamente que estaba representando a los detenidos y organizando un comité para proporcionar representación legal a todos ellos. Funcionarios del Estado lo detuvieron y exigieron la retirada de su representación. También asaltaron su casa y su oficina y se incautaron de documentos legales privilegiados. Fue condenado a 28 años de prisión.

13. El Gobierno también comunicó a otros abogados de los detenidos que no podían proporcionar a sus clientes o al público información sobre el caso, aparte de la que el Gobierno les había autorizado a compartir. Al parecer, los abogados fueron amenazados con ser detenidos o inhabilitados si no obedecían. Uno de los abogados dijo a los detenidos que no podía defenderlos ni cambiar el resultado del juicio. El abogado del Sr. Roziq se negó a proporcionarle a él o a su familia información sobre el juicio y finalmente abandonó la profesión de abogado.

14. La fuente informa de que ninguno de los 11 detenidos tuvo conocimiento de los cargos que se le imputaban hasta, como máximo, unas dos semanas antes de su juicio, y algunos no los conocieron hasta el mismo día del juicio. Al parecer, las autoridades se negaron a compartir cualquier información sobre el juicio con los acusados, sus familias o el público en general. Además, el Gobierno no permitió que ninguno de los 11 detenidos o sus abogados viera las pruebas o la lista de testigos con antelación, y además vigilaba las reuniones entre los abogados y sus clientes.

c) Enjuiciamiento y condena

15. Según la fuente, en febrero de 2016, los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico fueron juzgados colectivamente en un juicio secreto celebrado a puerta cerrada. Ni los acusados ni sus abogados recibieron los medios adecuados para preparar una defensa. Al parecer, a algunos se les dio aproximadamente un plazo de dos semanas para examinar las alegaciones del Gobierno, mientras que a otros se les dio aún menos tiempo. Además, se les negó el acceso antes del juicio a la mayoría de las pruebas, que se consideraron “clasificadas”. No se les permitió ver la lista de testigos. Incluso después de que se permitiera a los acusados examinar la denuncia presentada contra ellos, solo podían acceder al sumario durante un tiempo limitado.

16. Según la información recibida, inmediatamente antes de comparecer ante el tribunal, los 11 hombres fueron obligados a correr hacia el edificio del tribunal encadenados, lo que les provocó lesiones cuando algunos de ellos tropezaron o cayeron; luego fueron presentados ante el tribunal, todavía encadenados, con heridas sangrantes visibles y magulladuras en el rostro.

17. La fuente informa de que el juicio no fue un procedimiento normal dirigido por civiles. En vez de eso, lo presidió el Juez Togado Militar, aunque los acusados no ejercían funciones militares y fueron acusados con arreglo al Código Penal.

18. Según se informa, el juicio duró varios meses, durante los cuales la fiscalía presentó una larga lista de testigos y alegaciones. La fuente afirma que al menos dos testigos fueron golpeados y obligados a declarar. Aunque se permitió a la defensa interrogar a los testigos, no se les notificó con antelación su identidad ni el objeto de su testimonio. A la defensa se le negó la oportunidad de presentar testigos expertos, a pesar de haber presentado numerosas solicitudes al respecto. Durante el juicio, parece que un testigo del Gobierno se retractó de su testimonio a favor de la fiscalía mientras estaba en el estrado. Sin embargo, el Tribunal hizo caso omiso de su retractación y solo reconoció su testimonio inicial (que el testigo había calificado como totalmente falso). Otro testigo declaró que nunca había oído al acusado hablar de una posible rebelión armada y que se le había coaccionado para que testificara otra cosa a fin de conseguir un trato para evitar que se le siguiera hostigando. Se informó de que, a raíz de su testimonio, en el que se retractaba de las falsedades anteriores, el testigo fue brutalmente golpeado.

19. El 2 de junio de 2016, el Tribunal Supremo declaró a los acusados culpables y los condenó a penas que oscilaban entre los 14 años de prisión y la cadena perpetua (véase el párrafo 4).

d) Condiciones de reclusión

20. La fuente proporciona información sobre las condiciones en que los 11 hombres permanecieron en prisión preventiva. Cada celda tenía capacidad para 14 o 16 presos, pero normalmente se alojaban en ellas 25 presos y las sábanas están sucias e infestadas de chinches. Debido al hacinamiento, los presos dormían en el suelo de hormigón. Las condiciones en las celdas de la prisión eran insalubres y toda ella estaba infestada de cucarachas y roedores. En verano, el lugar era extremadamente caluroso y húmedo, y las ventanas estaban cubiertas con persianas de metal que dificultan la circulación del aire. El agua potable estaba contaminada por el óxido de las tuberías y a los presos solo se les permitía ducharse una vez a la semana, momento en el que docenas de ellos se apiñaban en una sola ducha.

21. Se informó de que, en mayo de 2019, los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico detenidos se encontraban reclusos en la colonia penal de máxima seguridad núm. 1 de Dushanbé y en la prisión núm. 3/2 de Vahdat.

22. La noche del 19 de mayo de 2019 estalló un motín en la prisión de máxima seguridad de Vahdat. La prisión albergaba a numerosos prisioneros políticos, incluidos miembros del Partido del Renacimiento Islámico. El Ministerio de Justicia comunicó que tres guardias y 29 reclusos habían muerto en el motín, incluidos algunos miembros del Partido. Los 11 miembros del Partido objeto del presente documento también fueron golpeados y sufrieron heridas, como fracturas de costillas.

23. La fuente informa de que a los presos solo se les permitía salir al exterior durante 15 minutos cada día y se les sometía a reglas estrictas e irrazonables. Entre las 6.00 horas y las 22.00 horas no se permitía a los prisioneros que se acostasen. Si algún prisionero violaba las reglas, todos los que estuviesen en la celda podían ser castigados. Los castigos variaban desde palizas hasta órdenes de permanecer inmóviles durante horas y horas (a veces completamente desnudos), o torturas con una corriente eléctrica a través del cuerpo del preso. Los prisioneros enfermos no estaban aislados del resto de la población y el acceso a la atención médica era limitado.

24. Según se informa, el Sr. Rajab sufrió un “microaccidente cerebrovascular”, pero no se le permitió ver a un médico. Cuando empezó a sufrir una inflamación grave y dolor en las encías fue llevado a un dentista, pero los instrumentos de este estaban sucios y sin esterilizar y algunos estaban cubiertos de sangre. El Sr. Rajab se vio obligado a rechazar los cuidados que se le ofrecían y ha seguido sufriendo. Muchos de los 11 detenidos tienen problemas de salud para los que no reciben un tratamiento adecuado. El Sr. Roziq tiene dolor en la zona del corazón y dificultades respiratorias, y su salud se ha deteriorado rápidamente desde que comenzó su encarcelamiento. El Sr. Faiz-Muhammad sufre una enfermedad renal para la cual no ha recibido tratamiento.

25. La fuente afirma que a la familia del Sr. Husaini solo se le permite verlo dos veces al año, durante 30 minutos cada vez. A las familias del Sr. Roziq y del Sr. Rajab se les permitía visitarlos cada tres o cuatro meses, pero en la actualidad no se les permite visitarlos en absoluto.

Categoría I

26. La fuente afirma que la detención es arbitraria y corresponde a la categoría I, ya que todas las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial. Además, los 11 hombres permanecieron en régimen de incomunicación, sin recibir información sobre los cargos que se les imputaban y sin ser llevados con prontitud ante una autoridad judicial. Fueron detenidos el 16 de septiembre de 2015 y comparecieron ante un juez el 19 de septiembre. Se les mantuvo sin comunicación con el mundo exterior o con un abogado durante 10 días. A algunos de ellos nunca se les informó de los cargos que se les imputaban antes del juicio, mientras que a otros se les informó aproximadamente dos semanas antes del juicio, más de cuatro meses después de su detención.

Categoría II

27. La fuente afirma que la detención es arbitraria y corresponde a la categoría II, ya que es resultado del ejercicio de las libertades de opinión y expresión, de asociación y de participación en los asuntos públicos.

28. La fuente afirma que el Gobierno detuvo y procesó arbitrariamente a los 11 hombres como represalia por haber ejercido sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, en calidad de miembros de un partido político que había criticado abiertamente al Gobierno. Su hostigamiento, seguido de sus detenciones en masa y de un juicio altamente politizado, encaja en lo que se presume que es un patrón de silenciamiento de las voces disidentes. El Tribunal Supremo declaró que el Partido del Renacimiento Islámico era una organización terrorista y prohibió todas sus actividades a partir de entonces, incluida la distribución de periódicos, videos, grabaciones de audio, literatura y folletos relacionados con el Partido. El Gobierno ha atacado y detenido sistemáticamente a los miembros de los partidos de la oposición, a los periodistas y a quienes publican contenidos críticos en los medios de comunicación social.

29. El Gobierno también ha tratado de intimidar a los 11 hombres amenazando a sus familias en un intento de silenciar las voces críticas. La esposa de uno de ellos fue intimidada al tratar de presentar denuncias ante el Ministerio del Interior y el hijo de otro fue interrogado y golpeado por la policía, tras una manifestación de apoyo al Partido. La detención forma parte de un patrón más amplio de supresión de todas las voces críticas con el Gobierno y el partido gobernante. La fuente alega que las medidas adoptadas contra los 11 detenidos constituyen una violación del artículo 19 del Pacto.

30. Según la fuente, el Gobierno ha tratado de penalizar la pertenencia al Partido del Renacimiento Islámico. Lo ve como una amenaza porque es el mayor partido de la oposición. Los 11 detenidos son altos dirigentes del Partido desde hace mucho tiempo y el Gobierno los ha perseguido sistemáticamente por su militancia.

31. La fuente sostiene que la decisión de juzgar a los 11 hombres colectivamente y de utilizar gran parte de las mismas pruebas, poco consistentes y falsificadas, demuestra los esfuerzos por criminalizar a todos los miembros del Partido. No había hechos significativos que apoyasen las acusaciones de la fiscalía, que no estaban fundamentadas en pruebas. Según se informa, no hay pruebas de que el Partido hubiera estado involucrado en los atentados de Dushanbé del 4 de septiembre de 2015, en los que los 11 hombres están acusados de participar. La fuente afirma que acusar a todos los líderes del partido de participar en un golpe de Estado fue simplemente un pretexto del Gobierno para silenciar las voces de la oposición.

32. La fuente afirma que la arbitrariedad de la detención queda demostrada por la acumulación de factores: a) el historial de intimidación y acoso a los miembros del Partido del Renacimiento Islámico en el pasado; b) el hecho de que en uno de los cargos formulados por la acusación se tipificaba explícitamente como delito la asociación de los 11 hombres con el Partido; c) su procesamiento en un juicio colectivo; d) su condena sin ninguna prueba sólida; y e) el contexto más amplio de la represión contra el Partido en su conjunto, incluida la prohibición de la organización y el ataque a sus abogados. Eso parece demostrar que la detención, el encarcelamiento y la condena de los 11 hombres fueron motivados por su asociación con el Partido.

33. La fuente sostiene que la detención de los 11 hombres fue una respuesta a la participación en los asuntos públicos de los miembros del Partido del Renacimiento Islámico. Los cargos que se les imputaron fueron inventados y diseñados para justificar la prohibición del Partido. Los detenidos eran altos dirigentes que, por lo tanto, desempeñaban un papel fundamental en el Partido, entre otras cosas, presentándose a las elecciones y criticando al Gobierno. Su encarcelamiento llegaba después de otros intentos de impedir que ellos y el partido en su conjunto participasen en la política o influyeran en los asuntos públicos.

34. Según la fuente, el Partido y sus miembros vienen siendo atacados desde hace mucho tiempo, de lo que dan prueba la detención y el encarcelamiento de un miembro del partido en octubre de 2013. Esa persona fue presuntamente torturada por la policía para que

se inculpará, antes de morir en prisión en enero de 2014. Según se informa, la represión política se ha acelerado desde que en septiembre de 2015 se produjera un intento de golpe de Estado, que fue el pretexto para la detención de los 11 hombres.

35. Las circunstancias que rodean las detenciones, encarcelamientos y condenas forman parte de un supuesto patrón de represión de los políticos y activistas de la oposición. Los miembros del Partido del Renacimiento Islámico han sido el blanco perseguido con más saña, pero otros grupos de oposición también han sido señalados. En 2013, un ex-Ministro de Industria fue detenido poco después de que anunciara la creación de un nuevo partido. Tras un juicio a puerta cerrada, fue declarado culpable y condenado a 29 años de prisión. Además, después de que un movimiento político pacífico pidiera una reforma democrática, fue declarado “extremista” y las personas acusadas de asociación con ese grupo fueron investigadas y detenidas. Se informó de que el líder de ese grupo político fue asesinado en marzo de 2015, y otro fue condenado a cinco años de prisión en mayo de 2016.

36. La fuente sostiene que el Gobierno no solo está castigando a los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico por su pasada participación política, sino que también les impide, a ellos y a otros afines al Partido, ejercer ese derecho. Esas acciones presuntamente vulneran lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25, apartado a), del Pacto.

37. La fuente alega además que las limitaciones a los derechos a la libertad de expresión y asociación permitidas en virtud del artículo 19, párrafo 3, y del artículo 22, párrafo 2, del Pacto no se aplican en el presente caso, ya que no se impusieron con un fin legítimo. El Gobierno utilizó la seguridad nacional como pretexto para silenciar las críticas y disolver un partido de la oposición. En las vagas alegaciones de hechos no se especificaba con precisión la naturaleza de la amenaza que representaba la expresión de la disidencia política pacífica. Las críticas al Gobierno no pueden castigarse en virtud de excepciones relativas a la seguridad nacional.

38. La fuente sostiene que, aunque las autoridades pudieran invocar la seguridad nacional, la limitación de la libertad de expresión no era “necesaria”. La sentencia impuesta parece desproporcionada con respecto a cualquier amenaza concebible que el Partido del Renacimiento Islámico pudiera plantear o la expresión de opiniones políticas. Limitar las libertades de expresión y de asociación de esa manera no puede considerarse “necesario” a efectos de la seguridad nacional. Dado que la crítica al Gobierno y la pertenencia al Partido son derechos protegidos, y que la limitación de esos derechos impuesta por el Gobierno no entra dentro de las contadas excepciones contempladas en el artículo 19, párrafo 3, y en el artículo 22, párrafo 2, del Pacto, la fuente alega que las detenciones son arbitrarias en la categoría II.

Categoría III

39. Según la fuente, las violaciones por el Gobierno de las normas internacionales de las debidas garantías procesales con ocasión de la detención, el encarcelamiento, el juicio y la condena de los 11 hombres fueron tan graves que hicieron que la privación de libertad fuera arbitraria. La fuente afirma que el objetivo del poder judicial no era emitir un juicio imparcial, sino silenciar y castigar a los críticos y suprimir la oposición pacífica.

40. La fuente afirma que las detenciones de los 11 hombres se llevaron a cabo sin orden judicial. Los funcionarios del Gobierno no se identificaron ni revelaron su autoridad para realizar las detenciones y muchos de los funcionarios que las llevaron a cabo llevaban ropas civiles. La fuente alega que eso constituye una violación de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

41. La fuente subraya que en el artículo 17 del Pacto se garantiza el derecho a la intimidad. En la Constitución de Tayikistán se reconoce el derecho a la intimidad en el hogar y se prohíben los registros e incautaciones sin una orden judicial. En el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal se establece, además, que la policía no puede entrar y registrar un domicilio privado sin la aprobación de un juez. La fuente afirma que los funcionarios del Estado no presentaron una orden judicial que les autorizara a llevar a cabo ninguno de los registros e incautaciones realizados en los domicilios de los 11 hombres, ni

tampoco presentaron órdenes judiciales que les autorizaran a realizar los registros e incautaciones que llevaron a cabo en las oficinas de sus abogados.

42. Según la fuente, ninguno de los 11 hombres fue informado con prontitud de los cargos que se le imputaban, y algunos nunca fueron informados de esos cargos hasta el juicio. El primer momento en que se sabe que se les informa de los cargos que se les imputan es aproximadamente dos semanas antes de su juicio.

43. La fuente explica que es difícil determinar con exactitud cuándo los 11 hombres fueron llevados ante un juez. Sin embargo, no hay pruebas de que eso haya sucedido antes de transcurridos tres días desde su detención. Al parecer, no se ha explicado qué circunstancias excepcionales podrían haber retrasado la audiencia. La fuente alega que denegar a los detenidos el derecho a impugnar sus detenciones dentro de un plazo razonable constituye una violación de lo dispuesto en el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto.

44. La fuente afirma que los 11 hombres fueron encarcelados a la espera de juicio sin la debida justificación. El encarcelamiento desde el momento de la detención y durante el juicio, que se basó en acusaciones genéricas vertidas contra todo el grupo, sugiere que el tribunal consideró la necesidad de la prisión preventiva según la norma general. Según se informa, la denegación de la libertad bajo fianza se inscribe en una pauta en la que los críticos del Gobierno suelen ser mantenidos durante largos períodos en prisión preventiva, porque el objetivo principal es acallar a los opositores y ponerlos entre rejas. La fuente alega que, en contradicción con el requisito de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla y de que dicha prisión preventiva se base en una determinación individualizada de que es a la vez razonable y necesaria, el juez no lo hizo así a la hora de considerar la prisión preventiva, en contravención del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

45. La fuente afirma, además, que los 11 hombres no tuvieron acceso a un abogado inmediatamente después de su detención. Al Sr. Husaini no se le permitió reunirse con un abogado hasta cuatro o cinco días después de ser detenido. El Sr. Faiz-Muhammad no pudo hacerlo hasta diez días después de su detención e incluso entonces la reunión se limitó a un tiempo muy corto. Los 11 hombres no han podido comunicarse con nadie fuera de la prisión debido a que fue “cerrada” a raíz de los disturbios de mayo de 2019. Incluso cuando finalmente se les permitió reunirse con abogados, el Gobierno supuestamente tomó medidas para impedir que recibieran un asesoramiento jurídico efectivo.

46. La fuente sostiene que a las 11 personas no solo se les negó el acceso a un abogado, sino que tampoco se les informó de los cargos que se les imputaban. El Sr. Husaini no fue informado de los cargos en el momento de su detención, estuvo detenido durante cinco días sin acceso a un abogado y no se le permitió impugnar su detención. El Sr. Faiz-Muhammad estuvo detenido durante 10 días sin acceso a un abogado y sin tener información sobre los cargos que se le imputaban. La fuente afirma que la violación de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto dio lugar a otras violaciones de los derechos humanos, como la tortura, mientras los detenidos permanecieron recluidos sin acceso a sus abogados ni a sus familias.

47. La fuente explica que el Gobierno utilizó tácticas de intimidación para impedir que los abogados de los 11 hombres proporcionaran la información necesaria a sus clientes y a sus familias y, en general, impidió que los abogados proporcionaran incluso la asistencia jurídica más básica. Cuando los abogados no pudieron ser disuadidos por las tácticas de intimidación, el Gobierno los hizo detener. Las autoridades tomaron medidas para garantizar que fueran abogados controlados por el Gobierno los que proporcionarían asesoramiento jurídico. Como limitaciones adicionales a la posibilidad de que los 11 hombres recibieran asesoramiento jurídico cabe mencionar el hecho de que se vigilaran sus reuniones con sus abogados y la negativa de las autoridades a proporcionar información y documentos, como las pruebas principales, una lista de testigos y detalles de los cargos, para que pudieran prepararse para el juicio. La fuente afirma que el Gobierno conculcó los derechos consagrados en el artículo 14, párrafo 3, apartados b) y d), del Pacto.

48. Según la fuente, el Gobierno infringió repetidamente el derecho a preparar la defensa. Se restringió drásticamente la posibilidad de que los acusados y sus abogados accedieran a las pruebas, los testigos e incluso los cargos. Tanto a los detenidos como a sus abogados se les negó el acceso a información que era sumamente necesaria para la

preparación del juicio. Ni siquiera tuvieron acceso a los cargos hasta, como mucho, dos semanas antes del juicio, e incluso entonces ese acceso se limitó a breves períodos de tiempo para examinar el sumario. La fuente alega que el Gobierno violó sus derechos reconocidos en el artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto.

49. La fuente afirma que el juicio fue secreto, ya que los acusados fueron juzgados a puerta cerrada, sus familias no pudieron obtener ninguna información sobre lo que estaba sucediendo y tampoco se dio a conocer ninguna información al público. La fuente alega que el Gobierno violó los derechos de los 11 hombres consagrados en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

50. La fuente sostiene que el tribunal que juzgó el caso no era independiente e imparcial, lo que dio lugar a un procedimiento injusto en el que no se respetó el derecho a la igualdad de medios procesales. La fuente afirma que el sistema judicial de Tayikistán no es independiente, ya que el Ministerio de Justicia supuestamente controla el poder judicial a nivel nacional. Según se informa, las autoridades del poder ejecutivo ejercen una influencia extrema sobre el poder judicial, que además carece de los recursos necesarios para funcionar de manera independiente. Para la fuente, no se puede considerar que un sistema judicial en el que la tasa de absolución es casi nula funcione de manera independiente.

51. Según la fuente, el juez permitió que los acusados comparecieran encadenados, con magulladuras y sangrando. Al parecer, también permitió que se intimidara a los testigos y, en un momento dado, permitió que se golpeará físicamente a un testigo por no haber mentido como se le había ordenado. El juez también admitió pruebas que se habían obtenido mediante registros e incautaciones ilegales y, en algunos casos, falsificadas. La fuente subraya que el juez no dio ningún peso al testimonio de un testigo de que el Gobierno lo había coaccionado para que diera un falso testimonio, pero aceptó el falso testimonio del que se había retractado. Por último, el tribunal declaró a los acusados culpables de todos los cargos, a pesar de la falta de pruebas que demostrasen cualquier conexión legítima con la supuesta conducta delictiva. La fuente alega que el Gobierno violó los derechos de los acusados reconocidos en el artículo 14, párrafo 1 y párrafo 3, apartado e), del Pacto y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

52. La fuente sostiene además que el Gobierno no respetó la presunción de inocencia. Antes del juicio, los funcionarios del Gobierno supuestamente habían expresado la virtual certeza de la culpabilidad de los acusados al referirse públicamente a ellos como terroristas y enemigos del pueblo. Fueron llevados a la sala de audiencias de una manera que sugería su culpabilidad, encadenados, magullados y ensangrentados. La fuente alega que, al dar a entender públicamente la culpabilidad de los acusados, obligándolos a comparecer ante el tribunal encadenados, magullados y ensangrentados, y mostrar una extrema parcialidad contra ellos durante todo el juicio, el Gobierno violó la presunción de inocencia, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto y en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

53. La fuente sostiene que los 11 acusados y sus abogados no pudieron interrogar eficazmente a los testigos porque no se les notificó con antelación la lista y, por tanto, no pudieron preparar adecuadamente el contrainterrogatorio. Además, el tribunal no permitió a la defensa presentar testigos expertos, mientras que al Gobierno sí se le permitió presentar dichos testigos. Por consiguiente, el Gobierno vulneró lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3, apartado e), del Pacto.

54. La fuente afirma que los 11 hombres compartieron la experiencia de las condiciones de internamiento, el maltrato físico y, en algunos casos, incluso la denegación de la atención médica más básica. Según se informa, el Sr. Husaini permaneció encarcelado cinco días después de su detención, durante los cuales se le prohibió hablar con su familia y fue golpeado físicamente. El Sr. Rajab, presuntamente, tuvo que sufrir en su celda temperaturas gélidas en invierno y agobiantes en verano, y fue golpeado duramente en su primer día de prisión y torturado durante tres días seguidos en un intento de obtener una confesión. Según se informa, se negó al Sr. Rajab una atención médica adecuada, ya que los funcionarios de la prisión solo permitieron que lo atendiera un dentista con instrumentos contaminados. Su celda estaba infestada de chinches que causaban picaduras dolorosas, pero los funcionarios de la prisión al parecer denegaron el tratamiento que hubiera acabado

con esa infestación. La fuente afirma que el Sr. Faiz-Muhammad fue torturado durante días mientras era transportado a la cárcel y mientras permaneció en prisión preventiva. Al parecer, un abogado pudo grabar pruebas de esas torturas. La tortura incluía palizas físicas que provocaban daños en los riñones y brutales descargas eléctricas. La fuente también alega que el Sr. Faiz-Muhammad recibió un disparo de los funcionarios de la prisión durante su encarcelamiento.

Respuesta del Gobierno

55. El 15 de noviembre de 2018, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que, a más tardar el 14 de enero de 2019, facilitara información detallada sobre la situación actual de los 11 detenidos y aclarara las disposiciones jurídicas que justificaran que siguieran privados de libertad, así como la compatibilidad de esa medida con las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que velara por la integridad física y mental de los presos.

56. El 18 de enero de 2019, el Grupo de Trabajo recibió respuesta del Gobierno. La respuesta llegó con retraso, y el Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no solicitara una prórroga del plazo de respuesta, como se prevé en sus métodos de trabajo. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede aceptar la respuesta como si se hubiera presentado dentro de plazo. El Grupo de Trabajo observa que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 16 de sus métodos de trabajo, emite sus opiniones sobre la base de toda la información que ha obtenido.

Deliberaciones

57. Al no haber recibido una respuesta del Gobierno dentro del plazo establecido, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

58. El Grupo de Trabajo, en su jurisprudencia, ha establecido su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables que se ha producido una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno no ha impugnado las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

Categoría I

59. La fuente ha afirmado que los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico fueron detenidos sin órdenes de detención y sin una notificación adecuada de los motivos de esta. Además, el domicilio del Sr. Rajab fue registrado sin una orden judicial y lo mismo ocurrió con todas las demás presuntas víctimas.

60. La fuente también ha afirmado que las 11 personas no fueron llevadas con prontitud ante un juez y que a ninguna de ellas le fueron notificados los cargos que se le imputaban. A algunos se les notificaron los cargos solo unas dos semanas antes del juicio, mientras que otros no los conocieron hasta que se inició el juicio. El Grupo de Trabajo observa que, incluso en su respuesta presentada con retraso, el Gobierno no aclaró las fechas de las detenciones ni presentó órdenes de detención o registro ni especificó las fechas en que los 11 hombres fueron llevados ante un juez o se les notificaron los cargos que se les imputaban.

61. El Grupo de Trabajo acepta que las 11 personas fueron detenidas alrededor del 16 de septiembre de 2015, que a ninguna de ellas se le mostró una orden de detención y que a ninguna de ellas se le dio una explicación de los motivos de esta. Como ha señalado anteriormente el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga un fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que pueda autorizar la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante

una orden de detención¹. En el presente caso, las autoridades no lo hicieron, violando así los derechos de las 11 personas reconocidos en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

62. Además, a ninguna de las 11 personas se les notificaron los cargos que se les imputaban hasta unas dos semanas antes del comienzo de su juicio. El Grupo de Trabajo recuerda que en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Pacto se exige que se informe a toda persona detenida no solo de los motivos de su detención, sino también de los cargos que se le imputan. La obligación prevista en el artículo 9, párrafo 2, consta de dos elementos: la información sobre los motivos de la detención debe facilitarse inmediatamente después de la detención y la información sobre los cargos debe facilitarse posteriormente a la mayor brevedad².

63. En el presente caso, las 11 personas fueron detenidas el 16 de septiembre de 2015. El Gobierno ha optado por no dar ninguna explicación sobre cuándo se les notificaron los cargos que se les imputaban y no ha respondido a la alegación de que dicha notificación no tuvo lugar hasta unas dos semanas antes del comienzo del juicio y que a algunos de los procesados solo se les notificaron los cargos el mismo día del juicio. El derecho a ser informado rápidamente de los cargos se refiere a la notificación de las acusaciones penales y “es exigible tanto en el contexto de los procesos penales ordinarios como en el de los procesos militares u otros regímenes especiales en que puedan imponerse sanciones penales”³. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha producido una violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

64. Asimismo, para establecer la legalidad de la privación de libertad, debe respetarse el derecho de la persona detenida a impugnar dicha legalidad ante un tribunal, tal y como contempla el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. Es importante recordar que el derecho a recurrir la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo y esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática⁴. Ese derecho, que es una norma imperativa del derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación de libertad⁵, no solo a la detención en procedimientos penales, sino también a la detención administrativa y otros regímenes jurídicos, como la detención militar, de seguridad y antiterrorista, la reclusión médica o psiquiátrica, la detención por migración, la detención por extradición, el arresto domiciliario, la reclusión en régimen de aislamiento, la detención por mendicidad o por consumo de drogas y la detención de menores⁶. También se aplica “independientemente del lugar de detención o de la terminología jurídica utilizada en la legislación. Toda forma de privación de libertad por cualquier motivo debe estar sujeta a la vigilancia y el control efectivos del poder judicial”⁷.

65. La fuente ha afirmado que los 11 individuos fueron llevados ante un juez tres días después de sus respectivas detenciones. El Gobierno no ha respondido a esa alegación. La supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal⁸ y es esencial para garantizar que la detención tenga un fundamento jurídico. Además, 48 horas son normalmente suficientes para transportar a una persona y prepararse para la audiencia; cualquier retraso debe ser absolutamente excepcional y estar justificado⁹. Eso no ocurrió en el presente caso, y el Gobierno no ha presentado ninguna razón excepcional que justifique la demora. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha violado el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

¹ Véanse las opiniones núm. 17/2019, núm. 79/2018, núm. 35/2018, núm. 75/2017 y núm. 66/2017.

² Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), sobre la libertad y la seguridad personales, párrs. 27 a 30.

³ *Ibid.*, párr. 29.

⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párrs. 2 y 3.

⁵ *Ibid.*, párr. 11.

⁶ *Ibid.*, directriz 1, párr. 47, apdo. a).

⁷ *Ibid.*, directriz 1, párr. 47, apdo. b).

⁸ *Ibid.*, párr. 3.

⁹ Véase la observación general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos.

66. La fuente también ha afirmado que las 11 personas fueron inicialmente mantenidas en régimen de incomunicación durante varios días. Como el Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente, mantener a las personas en régimen de incomunicación vulnera su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal reconocido en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto¹⁰. Como los detenidos no podían impugnar su detención, también se vulneró su derecho a un recurso efectivo reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

67. El Grupo de Trabajo observa que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a impugnar la legalidad de la detención, las personas detenidas deben tener acceso, desde el momento de la detención, a la asistencia letrada de su elección¹¹. Eso se les negó a las 11 personas, lo que afectó negativamente a su capacidad para ejercer su derecho a impugnar la legalidad de su detención con arreglo al artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

68. Además, según el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie puede ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En el presente caso, se registraron las residencias privadas de las 11 personas sin una orden judicial y se incautaron varios artículos. Esa confiscación de bienes sin una orden de registro constituye otra violación grave del artículo 9, párrafo 1, del Pacto¹².

69. Por último, en relación con la prisión preventiva de las 11 personas, el Grupo de Trabajo recuerda que es una norma bien establecida del derecho internacional que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, y que se ordene por el menor tiempo posible¹³. En el artículo 9, párrafo 3, del Pacto se establecen dos obligaciones acumulativas, a saber, la puesta a disposición judicial sin demora en los primeros días de la privación de la libertad y la adopción de una resolución judicial sin dilaciones indebidas, en cuyo defecto la persona deberá ser puesta en libertad (A/HRC/19/57, párr. 53).

70. En el artículo 9, párrafo 3, del Pacto se señala: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. De ahí que la libertad se reconozca como principio y su privación, como excepción en aras de la justicia (*ibid.*, párr. 54). En virtud del artículo 9, párrafo 3, la prisión preventiva debe ser excepcional y de corta duración y la puesta en libertad puede ir acompañada de medidas destinadas a garantizar la presencia del acusado en el juicio (*ibid.*, párr. 56)¹⁴.

71. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa que en la respuesta del Gobierno recibida con retraso no se examinan las razones que dieron lugar a la prisión preventiva de las 11 personas a la espera de juicio. Según la información recibida, nunca se realizó una evaluación individualizada de la necesidad de adoptar esa medida. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la detención preventiva de las 11 personas vulneró lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

72. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que, dado que la detención tuvo lugar sin una orden judicial, se mantuvo inicialmente a los detenidos en régimen de incomunicación, no se presentaron cargos hasta poco antes del juicio y se les impidió ejercer su derecho a impugnar la legalidad de la detención; y dado que su prisión preventiva se impuso en contravención de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la detención y la prisión preventiva son arbitrarias y corresponden a la categoría I.

¹⁰ Véanse las opiniones núm. 44/2018, núm. 35/2018, núm. 11/2018, núm. 79/2017 y núm. 28/2016.

¹¹ Véase Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, párrs. 12 a 15.

¹² Véanse las opiniones núm. 33/2019, núm. 31/2019, núm. 83/2018, núm. 78/2018, núm. 36/2018 y núm. 83/2018.

¹³ Véanse las opiniones núm. 57/2014, núm. 49/2014 y núm. 28/2014. Véanse también A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58 y A/HRC/30/19.

¹⁴ Véase también la observación general núm. 35, párr. 38.

Categoría II

73. La fuente ha afirmado que las 11 personas fueron detenidas debido al ejercicio legítimo de sus derechos reconocidos en el artículo 19, párrafo 2, el artículo 22, párrafo 1, y el artículo 25, apartado a), del Pacto. El Gobierno se limitó a rechazar esas alegaciones, afirmando que se les procesaba por delitos de terrorismo y por intentar derrocar el orden constitucional por medios violentos.

74. El Gobierno sostuvo que los presuntos delitos ocurrieron cuando se llevó a cabo un ataque armado contra dos bases del ejército en la noche del 3 al 4 de septiembre de 2015. El Gobierno sostuvo que, tras una investigación, los 11 individuos fueron acusados. Sin embargo, el Gobierno no ha alegado que las 11 personas formaran parte del ataque armado y no ha facilitado ninguna información específica sobre el delito presuntamente cometido por cada una de ellas.

75. El Grupo de Trabajo recuerda que, en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Tayikistán, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que “la prohibición de partidos políticos religiosos y de base étnica, introducida por las enmiendas constitucionales de 2016, plantea[ba] problemas de compatibilidad con el Pacto” (CCPR/C/TJK/CO/3, párr. 53). También preocupaban al Comité “el acoso y las largas penas de prisión impuestas a los dirigentes del Partido del Renacimiento Islámico después de unos juicios injustos y celebrados a puerta cerrada y el encarcelamiento de miembros del partido después de que este fuese calificado en 2015 de ‘terrorista’ por su presunta participación en un intento violento de hacerse con el poder”, así como “el acoso grave, y a menudo el encarcelamiento, de familiares de grupos de la oposición o de personas asociadas con esos grupos” (*ibid.* y párr. 37)¹⁵.

76. El Grupo de Trabajo observa la similitud entre la respuesta tardía del Gobierno en el presente caso y la presentada recientemente en otros dos casos¹⁶. Observa además la similitud de la pauta de hechos en ambas ocasiones.

77. El Grupo de Trabajo observa que el Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 34 (2011), sobre las libertades de opinión y de expresión, declaró que esas libertades, reconocidas en virtud del artículo 19 del Pacto, son condición indispensable para el pleno desarrollo de la persona. Son esenciales para cualquier sociedad y, de hecho, constituyen la piedra angular de toda sociedad libre y democrática (párr. 2).

78. El Comité también ha declarado en la misma observación general que la libertad de expresión incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras, y este derecho incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan transmitirse a otros, con inclusión de las opiniones políticas. Asimismo, en relación con ese derecho pueden permitirse restricciones que guarden relación con el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El Comité ha especificado que no se permiten otras restricciones distintas de las contempladas en el párrafo 3, aunque justifiquen restricciones a otros derechos protegidos en el Pacto. Las restricciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen. Las restricciones deben aplicarse únicamente para los fines para los que fueron prescritas y deben estar directamente relacionadas con su necesidad específica. En virtud del artículo 21 del Pacto se permiten restricciones al derecho de reunión por los mismos tres motivos.

79. En el presente caso, el Gobierno de Tayikistán no ha invocado ninguna de las restricciones permitidas. Hizo vagas alegaciones de actos delictivos supuestamente cometidos por las 11 personas, pero no especificó cómo se produjo ninguno de ellos. El Grupo de Trabajo tiene muy claro que el motivo de la detención y el posterior encarcelamiento de los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico fue, de hecho, su ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión. El Grupo de Trabajo

¹⁵ Véanse también CCPR/C/TJK/CO/2, párr. 24, y CAT/C/TJK/CO/3, párrs. 11, 12, 21 y 22.

¹⁶ Véanse las opiniones núm. 17/2019 y núm. 2/2018.

observa que esas alegaciones siguen la pauta que ya ha señalado en casos anteriores¹⁷, así como la observada por el Comité de Derechos Humanos.

80. Si bien la libertad de expresión y la libertad de reunión no son derechos absolutos, cuando un Estado impone restricciones a su ejercicio no puede poner en peligro el propio derecho. Además, las restricciones permitidas en virtud del artículo 19, párrafo 3, no podrán invocarse nunca como justificación para amordazar la defensa de la democracia multipartidista, los principios democráticos y los derechos humanos¹⁸.

81. El Grupo de Trabajo considera que se ha violado el derecho de los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico a participar en la dirección de los asuntos públicos, reconocido en el artículo 25 del Pacto, ya que su detención estuvo directamente relacionada con su participación en la oposición. El Grupo de Trabajo recuerda que los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia a través del debate público y el diálogo con sus representantes o mediante su capacidad de organizarse. Esa participación se apoya en la garantía de las libertades de expresión, de reunión y de asociación¹⁹. Además, la libertad de asociación, incluido el derecho a formar organizaciones políticas o relacionadas con los asuntos públicos y a afiliarse a ellas, es esencial para los derechos protegidos en virtud del artículo 25²⁰. El Grupo de Trabajo considera que la detención de las 11 personas fue el resultado del ejercicio de sus derechos reconocidos en el artículo 25 del Pacto.

82. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico fueron detenidos debido al ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión y del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y, por lo tanto, corresponde a la categoría II.

Categoría III

83. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad de las 11 personas es arbitraria y corresponde a la categoría II, el Grupo de Trabajo desea subrayar que no debería haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo y la fuente ha afirmado que la detención de las 11 personas fue arbitraria con arreglo a la categoría III.

84. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no respondió a ninguna de las alegaciones específicas relativas a un juicio imparcial, salvo una declaración general en el sentido de que se permitió a los detenidos el acceso a sus abogados y que el público quedó excluido del juicio por tratarse de un asunto de seguridad nacional. El Grupo de Trabajo no puede aceptar una respuesta vaga a las muy específicas y graves acusaciones que tiene ante sí. Debe considerar que a las 11 personas se les negó el acceso a la asistencia letrada y no pudieron comunicarse libremente con sus abogados. Todos fueron acusados de delitos muy graves y condenados a largas penas de prisión. La denegación de asistencia letrada y la injerencia en la independencia de los abogados en el presente caso constituyó un flagrante desprecio de las garantías procesales previstas en el artículo 14, párrafo 3, apartados b) y d), del Pacto.

85. Además, a ninguna de las 11 personas se le notificaron con prontitud los cargos que se le imputaban, sino que no se hizo hasta poco antes del juicio. Esa situación no puede conciliarse con las obligaciones previstas en el artículo 14, párrafo 3, apartado a), del Pacto, por lo que el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado esa disposición. El hecho de que no se notificaran con prontitud los cargos a los acusados también les impidió a ellos y a sus abogados preparar su defensa. En el artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto se exige que todo acusado de un delito penal disponga del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. El Grupo de Trabajo no puede aceptar que la notificación de los cargos dos semanas antes del juicio, especialmente en un caso en el que mediaban acusaciones de terrorismo, sea compatible con los requisitos establecidos en el artículo 14, párrafo 3,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párrs. 21 a 23.

¹⁹ Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 8.

²⁰ *Ibid.*, párr. 26.

apartado b). Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha producido otro incumplimiento de esta disposición²¹.

86. El Grupo de Trabajo también observa con preocupación las denuncias de intimidación grave de los abogados. Eso constituye una grave injerencia en el derecho a la asistencia letrada, en contravención de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto²². El Estado tiene el deber jurídico y positivo de proteger a todas las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción de cualquier violación de los derechos humanos y de proporcionar reparaciones cuando se produzca dicha violación. En particular, el Grupo de Trabajo recuerda que “los abogados deben poder desempeñar sus funciones con eficacia e independencia, sin miedo a represalias, injerencias, intimidación, obstáculos o acoso”²³.

87. El Grupo de Trabajo observa, además, que las 11 personas y sus abogados no tuvieron pleno acceso a todas las pruebas y materiales del caso. El Grupo de Trabajo ha afirmado que toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder a la documentación relacionada con esa privación de libertad, o presentada al tribunal por el Estado, a fin de preservar la igualdad de medios procesales²⁴. Con todo, la divulgación de información puede restringirse si la restricción es necesaria y proporcionada para la consecución de un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha demostrado que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado²⁵. En el presente caso, el Gobierno no ha demostrado la necesidad y la proporcionalidad de esta medida. El Grupo de Trabajo considera que a las 11 personas se les negó el derecho a la igualdad de medios procesales reconocido en el artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto.

88. Además, a las 11 personas y sus abogados no se les permitió interrogar a los testigos, no se les notificó con prontitud la lista de testigos ni tuvieron acceso a ella y ni siquiera sabían cuándo iba a comparecer cada testigo. En su observación general núm. 32 (2007), sobre el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial, el Comité de Derechos Humanos ha subrayado que en el artículo 14, párrafo 3, apartado e), del Pacto se garantiza el derecho a que se admita a los testigos que sean pertinentes para la defensa y a que se dé a los acusados la oportunidad de interrogar y recusar a los testigos de cargo en alguna etapa del procedimiento (párr. 39). En el presente caso, ese derecho fue denegado. La falta de igualdad de medios procesales constituye una vulneración de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3, apartado e), del Pacto.

89. El Grupo de Trabajo observa que la fuente alega que se negó el derecho de las 11 personas a la presunción de inocencia, ya que fueron presentadas al tribunal con grilletes y magulladuras y los funcionarios gubernamentales se refirieron abiertamente a ellas como “terroristas” antes del juicio. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha respondido a esas denuncias.

90. En su observación general núm. 32, el Comité de Derechos Humanos afirma que todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar el resultado de un juicio y que normalmente los acusados no deben ser encadenados o mantenidos en jaulas durante los juicios o presentados ante el tribunal de cualquier otra manera que indique que pueden ser delincuentes peligrosos. Además, los medios de comunicación deben evitar que la cobertura informativa socave la presunción de inocencia (párr. 30).

91. El Grupo de Trabajo observa que los funcionarios gubernamentales hicieron declaraciones públicas sobre las 11 personas llamándolas “terroristas”. El Gobierno tampoco ha dado ninguna explicación sobre qué justificaba la necesidad de presentar a los

²¹ Véanse, por ejemplo, *Peter Grant c. Jamaica* (CCPR/C/56/D/597/1994) y *Michael Sawyers y Desmond McLean c. Jamaica* (CCPR/C/41/D/226/1987).

²² Véanse las opiniones núm. 70/2017 y núm. 29/2017.

²³ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, párr. 15.

²⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, principio 12 y directriz 13. Véanse también las opiniones núm. 78/2018, núm. 18/2018, núm. 89/2017, núm. 50/2014 y núm. 19/2005.

²⁵ Véanse Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, directriz 13, párrs. 80 y 81, y las opiniones núm. 17/2019 y núm. 18/2018.

detenidos al tribunal de la manera en que fueron presentados. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que se ha producido una violación de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

92. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha declarado que la investigación se llevó a cabo con cierto grado de secreto debido a cuestiones de seguridad nacional, pero no ha presentado ninguna explicación de por qué el juicio se celebró a puerta cerrada, hasta el punto de que ni siquiera se permitió la presencia de los familiares. El Grupo de Trabajo observa que el caso de las 11 personas no entra en ninguna de las excepciones a la obligación general de celebrar juicios públicos establecido en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto, y que el Gobierno no invocó ninguna de esas excepciones para justificar el juicio a puerta cerrada. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

93. La fuente afirmó que las 11 personas no fueron juzgadas por un tribunal imparcial e independiente como se exige en el artículo 14 del Pacto, otra alegación desestimada sumariamente por el Gobierno. No obstante, el Grupo de Trabajo no puede aceptar la afirmación general de la fuente de que “el sistema judicial del país no es independiente, ya que el Ministerio de Justicia supuestamente controla el poder judicial a nivel nacional”, sin una explicación concreta de cómo ese control se manifestó en el juicio.

94. Sin embargo, el Grupo de Trabajo acepta la alegación de la fuente de que el juez permitió la intimidación de los testigos, admitió las pruebas obtenidas mediante registros ilegales e hizo caso omiso de la afirmación de que un testigo fue coaccionado para que prestara testimonio. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que los requisitos de competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal establecidos en virtud del artículo 14, párrafo 1, constituyen un derecho absoluto que no está sujeto a ninguna excepción²⁶. El Comité de Derechos Humanos ha observado además que el requisito de imparcialidad tiene dos aspectos: los jueces no deben permitir que su juicio se vea influido por prejuicios o parcialidades personales, ni albergar ideas preconcebidas sobre el caso que se les presenta, ni actuar de manera que promueva indebidamente los intereses de una de las partes en detrimento de la otra, y el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable²⁷.

95. Es evidente que el comportamiento del juez de primera instancia mostró un claro sesgo hacia la acusación, por lo que el Grupo de Trabajo considera que se ha violado lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Para llegar a esa conclusión, el Grupo de Trabajo tiene presentes las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el tercer informe periódico de Tayikistán, en las que expresó su preocupación por las denuncias de juicios injustos, las violaciones de la igualdad de medios procesales y de la presunción de inocencia, y la celebración de juicios a puerta cerrada (CCPR/C/TJK/CO/3, párr. 37). El Grupo de Trabajo decide remitir el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

96. El Grupo de Trabajo también desea observar que el juicio fue presidido por un juez militar, aunque las 11 personas eran civiles. El Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares constituye una violación del Pacto y del derecho internacional consuetudinario y que, con arreglo al derecho internacional, los tribunales militares solo son competentes para enjuiciar al personal militar por delitos militares (A/HRC/27/48, párrs. 67 a 70)²⁸.

97. El Grupo de Trabajo desea expresar su grave preocupación por las alegaciones de la fuente de que varias personas fueron gravemente maltratadas durante su detención. En opinión del Grupo de Trabajo, el trato descrito por la fuente revela la existencia de indicios razonables de un incumplimiento de la prohibición absoluta de infligir malos tratos y torturas, que es una norma imperativa del derecho internacional y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como del principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas

²⁶ Observación general núm. 32, párr. 19.

²⁷ *Ibid.*, párr. 21.

²⁸ Véanse también las opiniones núm. 32/2018, núm. 28/2018, núm. 30/2017 y núm. 44/2016.

a Cualquier Forma de Detención o Prisión y de la regla 1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). El Grupo de Trabajo tiene presentes las observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre el tercer informe periódico de Tayikistán, en las que se mencionan específicamente los presuntos malos tratos al Sr. Rajab (CAT/C/TJK/CO/3, párrs. 11 y 12). El Grupo de Trabajo también remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

98. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que el juicio de los 11 miembros del Partido del Renacimiento Islámico se llevó a cabo con total desprecio de las garantías enunciadas en el artículo 14, párrafos 1; 2; y 3, apartados b), d) y e), del Pacto y que estas fueron de tal gravedad que su privación de libertad tuvo un carácter arbitrario que corresponde a la categoría III.

Categoría V

99. La fuente no ha presentado ninguna comunicación con respecto a la categoría V. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha observado que el presente caso es sorprendentemente similar a otros dos casos que ha examinado anteriormente en las opiniones núm. 2/2018 y núm. 17/2019, en que los hechos, las alegaciones e incluso la respuesta del Gobierno seguían el mismo patrón. El Grupo de Trabajo también observa que en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Tayikistán, el Comité contra la Tortura expresó su profunda preocupación “por las alegaciones de que las personas que han denunciado tortura, sus familiares, los defensores de los derechos humanos, incluidos los abogados que representan a las víctimas de la tortura, y los periodistas que informan sobre las denuncias de tortura se enfrentan a menudo a represalias por funcionarios del Estado parte” (CAT/C/TJK/CO/3, párrs. 21 y 22).

100. Asimismo, en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Tayikistán, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por “el acoso con motivaciones políticas de miembros de la oposición, que atenta contra el auténtico pluralismo político”, señalando el hostigamiento, el encarcelamiento y la condena tras juicios injustos de dirigentes de los partidos y miembros de la oposición (CCPR/C/TJK/CO/3, párr. 53).

101. El Grupo de Trabajo considera, por tanto, que existe una clara pauta en la actitud de las autoridades hacia quienes forman parte de la oposición, como en el presente caso. El Grupo de Trabajo considera que esa distinción discrimina sobre la base de la opinión política o de otra índole, de manera que no se tiene en cuenta la igualdad de los derechos humanos, motivo de discriminación prohibido en virtud del artículo 2, párrafo 1, y del artículo 26 del Pacto. El Grupo de Trabajo considera que los hechos del presente caso revelan una violación que corresponde a la categoría V.

102. De conformidad con lo establecido en el párrafo 33, apartado a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

103. El Grupo de Trabajo desea expresar su más profunda preocupación por las denuncias de acoso e intimidación y amenazas persistentes a los familiares de las 11 personas. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que los Estados tienen el deber de proteger a las personas y grupos y de ejercer la debida diligencia al hacerlo. La intimidación o las represalias pueden ser el resultado de actos u omisiones tanto de agentes estatales como no estatales. Sin embargo, los actos u omisiones son atribuibles al Estado cuando se llevan a cabo con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario u otra persona que actúe en calidad oficial contra cualesquiera personas o grupos que traten de cooperar, que cooperen o que hayan cooperado con las Naciones Unidas (véase A/HRC/33/19). El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que vele por que cesen todos los actos de intimidación contra todos los familiares de las 11 personas, que se lleve a cabo una investigación imparcial y eficaz de esos actos y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

Decisión

104. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de los Sres. Saidumar Husaini, Muhammadali Faiz-Muhammad, Rahmatulloi Rajab, Zubaidulloi Roziq, Vohidkhon Kosidinov, Kiyomiddin Avazov, Abduqahar Davlatov, Hikmatulloh Sayfulloza, Sadidin Rustamov, Sharif Nabiev y Abdusamat Ghayratov, que contraviene lo dispuesto en los artículos 2, 3, 7 y 9, 10, 11, 12, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafos 1 y 3; el artículo 9, párrafos 1, 2, 3 y 4, el artículo 14, párrafos 1; y 2, apartados b), d) y e), y los artículos 15, 19, 21, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es arbitraria y corresponde a las categorías I, II, III y V.

105. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Tayikistán que adopte las medidas necesarias para remediar sin dilación la situación de esas 11 personas y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

106. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad a las 11 personas y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

107. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que vele por que se lleve a cabo una investigación cabal e independiente de todas las circunstancias que rodearon la privación de libertad arbitraria de las 11 personas y a que adopte medidas apropiadas contra los responsables de la violación de sus derechos.

108. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 33, apartado a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, para que tomen las medidas oportunas.

109. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión a través de todos los medios disponibles y de la forma más amplia posible.

Procedimiento de seguimiento

110. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y el Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, entre ellas:

a) Si los Sres. Saidumar Husaini, Muhammadali Faiz-Muhammad, Rahmatulloi Rajab, Zubaidulloi Roziq, Vohidkhon Kosidinov, Kiyomiddin Avazov, Abduqahar Davlatov, Hikmatulloh Sayfulloza, Sadidin Rustamov, Sharif Nabiev y Abdusamat Ghayratov han sido puestos en libertad y, en caso afirmativo, en qué fecha;

b) Si se ha concedido una indemnización u otra reparación a esas 11 personas;

c) Si se ha llevado a cabo una investigación sobre la violación de sus derechos y, en caso afirmativo, el resultado de la misma;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Tayikistán con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

111. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente

opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

112. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Ese procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

113. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁹.

[Aprobada el 19 de noviembre de 2019]

²⁹ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.